

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN – SENTENCIA	
DEMANDANTE	ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y OTROS
RADICADO	05001-31-05-006-2017-00737-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de invalidez post-mortem y sustitución pensional a favor de cónyuge e hijos
DECISIÓN	Revoca parcialmente

*Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE** (q.e.p.d.) ahora por sus sucesores procesales LEOBARDO DE JESÚS AGUIRRE HIGUITA, cónyuge, y sus hijos WILLIAM DE JESÚS, LUIS EDUARDO, JORGE ELIECER; DIANA PATRICIA, WILMAR ANDRÉS, y JOHN JAIRO AGUIRRE DURANGO, contra la sociedad la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 046**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el día 21 de febrero de 2022, e igualmente se conocerá del proceso bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de esta misma administradora pública de pensiones, en aquellos aspectos de la sentencia de primer grado que le hayan sido desfavorables y que no hubiesen sido objeto del recurso de alzada, conforme lo señalado en el art. 69 del CPTSS.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE, durante su vida laboral, se desempeñó como madre comunitaria durante más de 20 años, realizando cotizaciones al extinto ISS hoy COLPENSIONES desde el año 1996.

Que desde el año 2011 la señora DURANGO DE AGUIRRE empezó a padecer unos quebrantos de salud que disminuyeron su capacidad laboral, por lo que decidió iniciar los trámites de calificación de pérdida de capacidad laboral desde el 31 de enero de 2012, siendo calificada en primera oportunidad por el extinto ISS mediante dictamen del 16 de agosto de 2012, otorgándole una pérdida de capacidad laboral del 44.43%, con fecha de estructuración del 31 de enero de 2012.

Relata la parte activa que, al no estar de acuerdo con esta calificación, se presentó recurso de apelación, pero COLPENSIONES en vez de remitir el expediente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, procedió a efectuar una nueva valoración, otorgándole a la actora una pérdida

de capacidad laboral del 31.53% con fecha de estructuración del 8 de mayo de 2014.

Luego se envió el expediente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, quien profirió dictamen el día 12 de noviembre de 2014, calificando a la actora con una pérdida de capacidad laboral del 43.45% con fecha de estructuración del 8 de mayo de 2014; sin embargo, en esta nueva calificación se tuvo en cuenta el dictamen emitido por COLPENSIONES y no el dictamen inicial del extinto ISS donde se había establecido como fecha de estructuración el 31 de enero de 2012, calificación que a pesar de estar inmersa en este evidente error, fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, vulnerando así los derechos fundamentales de la demandante.

Finalmente relata el libelo genitor que, debido al deterioro paulatino en el en el estado de salud de la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE, esta se vio en la necesidad de realizarse una calificación particular de su pérdida de capacidad laboral, ante la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.17% con fecha de estructuración del 8 de mayo de 2014, a pesar de que la fecha de estructuración es del 31 de enero de 2012, fecha en que iniciaron las patologías que disminuyeron la pérdida de capacidad laboral de la demandante.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que deje sin efecto y validez el dictamen N° 22172953-2649 del 25 de Noviembre de 2015 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y en su lugar, SE DECLARE que a la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE, le asiste derecho a una pensión de invalidez de origen común a cargo de COLPENSIONES, por presentar una pérdida de capacidad laboral del 51.17% con fecha de estructuración del 31 de enero de 2012, en consecuencia, se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de esta prestación económica a partir del 31 de enero de 2012, junto con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, y las costas del proceso.

#### IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su vocero judicial (fls. 309 y ss del archivo PDF N° 01), manifestando que no le constan los hechos expuestos por la parte demandante, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER y PAGAR PENSIÓN DE invalidez; ; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS; PRESCRIPCIÓN; BUENA FE DE COLPENSIONES; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; y la EXCEPCIÓN INNOMINADA”*.

A su turno, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA (fls. 363 y ss del archivo PDF N° 01), manifestó no constarle los hechos relatados por la parte activa, a excepción de aquellos relativos a las calificaciones de pérdida de capacidad laboral efectuadas a la demandante, y que constan en la prueba documental aportada con la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso como excepción de fondo la que denominó: *“INEXISTENCIA DE FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES”*.

Finalmente, a folios 454 y ss del archivo PDF N° 01, obra la respuesta a la demanda por parte de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ quien, actuado a través de apoderado judicial, aceptó como ciertos los hechos relativos a las calificaciones de pérdida de capacidad laboral efectuadas a la demandante por el ISS, COLPENSIONES, y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“LEGALIDAD DE LA CALIFICACIÓN EMITIDA POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ; IMPROCEDENCIA DEL PETITUM: INEXISTENCIA DE PRUEBA PARA CONTROVERTIR EL DICTAMEN – CARGA DE LA PRUEBA A CARGO DEL CONTRADICTOR; LA VARIACIÓN EN LA CONDICIÓN CLÍNICA Y LA*

*INCLUSIÓN DE DIAGNÓSTICOS ADICIONALES A LOS CALIFICADOS POR LA JUNTA REGIONAL, EXIMEN DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD; FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: INEXISTENCIA DE PRETENSIONES – COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL; BUENA FE DE LA PARTE DEMANDADA; y la EXCEPCIÓN GENÉRICA”.*

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En el fallo objeto de apelación y consulta, la juez a-quo en audiencia pública celebrada el día 21 de febrero de 2022, DECLARÓ el derecho post-mortem de la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE, a la pensión de invalidez desde el 8 de mayo de 2014 (fecha de estructuración del estado de invalidez) hasta el 21 de diciembre de 2020 (fecha de fallecimiento).

En consecuencia, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a los sucesores procesales de la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE, un retroactivo pensional liquidado en la suma de \$64.136.439, por las mesadas pensionales comprendidas entre el 8 de mayo de 2014 y el 21 de diciembre del 2020, a razón de un salario mínimo legal mensual vigente con su mesada adicional de noviembre, correspondiéndole el 50% al cónyuge LEOBARDO DE JESÚS AGUIRRE HIGUITA (\$32.068.219); y restante el 50% para cada uno de los 6 hijos, William de Jesús, Luis Eduardo, Jorge Eliecer, Diana Patricia, Wilmar Andrés, y John Jairo Aguirre Durango, en partes iguales de \$5.344.702.

Sobre el anterior retroactivo pensional, autorizó a COLPENSIONES a efectuar la deducción del aporte obligatorio con destino al subsistema de salud.

De otro lado, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de la pretensión de intereses moratorios, en su lugar y, como decisión ultra petita, CONDENÓ a la entidad al pago indexado de los valores causados a favor de cada sucesor procesal desde la fecha causación de cada periodo generado, hasta cuando se cumpla con el pago.

Finalmente impuso las costas del proceso en primera instancia a cargo de COLPENSIONES y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a favor de los sucesores procesales, fijando como agencias en derecho la suma de \$2.800.000, a cargo de COLPENSIONES en proporción al derecho de cada sucesor procesal; y \$1.200.000 a cargo de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de manera proporcional a los sucesores procesales.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE (q.e.p.d.) sí acreditó en vida el cumplimiento de los requisitos legales para causar una pensión de invalidez, pues las afectaciones en su estado de salud resultaron evidentes en su historia clínica, y muchas de las patologías allí contenidas, fueron vertidas en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral elaborados por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y que al contar esta misma afiliada con más de 50 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, dejó causado el derecho pensional a favor de sus beneficiarios.

En relación a la excepción de prescripción, consideró la funcionaria judicial de primer grado, que la misma no está llamada a prosperar en el sub lite, por cuanto la demanda se presentó antes de que transcurriesen 3 años desde la fecha de notificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral del año 2015 y la fecha de presentación de la demanda (año 2017).

Que no proceden los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, pues fue apenas con la sentencia de que se logró declarar el estado de invalidez de la señora DURANGO DE AGUIRRE, accediéndose en su lugar a la indexación del retroactivo pensional causado.

## **VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.**

La apoderada judicial de COLPENSIONES, refiere no estar de acuerdo con las condenas impuestas a entidad, pues esta actuó de buena fe, toda vez

que no le era posible reconocer pensiones que no tuvieran un asidero legal, en el sub lite se presentaba una falta de legitimación en la causa para controvertir los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, la entidad perdió la competencia para el reconocimiento pensional, y por ende era necesario el debate judicial para dirimir la controversia suscitada.

También expuso la recurrente, que en el eventual caso de confirmarse el derecho a la pensión de invalidez deprecada, no se acceda al retroactivo pensional y a la condena en costas, señalando frente a lo primero, que el disfrute pensional solo resulta procedente a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, y que la buena fe y la conducta asumida por la entidad, exoneran a COLPENSIONES de asumir costas procesales al interior del trámite judicial

### **Alegatos de conclusión**

En su debida oportunidad, las apoderadas de las partes presentaron sus alegatos de conclusión en segunda instancia.

COLPENSIONES insiste en las argumentaciones del recurso de alzada, relativas a la falta de legitimación en la causa, la buena fe desplegada durante todo el trámite administrativo y judicial, pues no le esta permitido ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos, por lo tanto no puede reconocer pretensiones que no tengan asidero legal, solicitándole a la Sala que solo en el eventual caso de confirmarse el derecho pensional, se revoquen las condenas a retroactivo pensional y costas procesales.

A su turno, la apoderada judicial de la parte demandante, solicita se confirme la sentencia de primer grado, al considerar que la administradora pública de pensiones, si debe ser condenada a la pensión de invalidez, su retroactivo indexado y las costas procesales, pues con su actuar de mala fe hizo incurrir a la demandante no solo en gastos económicos sino en un desgaste físico, el hecho de que haya tenido que acudir a instancias legales demuestra la vulneración de los derechos constitucionales, al haber cercenado los derechos y las garantías mínimas de una mujer de la tercera edad enferma,

obligándola a trabajar en condiciones de discapacidad por 3 años más para pasar el dictamen a segunda instancia.

Expone que no condenar al pago del retroactivo hace que Colpensiones sea premiado por su ineficiencia y su mala fe y que el desgaste que en vida tuvo la demandante sea en vano, desgaste que no le permitió gozar ni un día de su pensión debido, a que tristemente, el Covid le arrebató su vida antes que la justicia protegiera sus derechos a la pensión.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de invalidez post mortem, retroactivo pensional a favor de sus beneficiarios:**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, teniendo en cuenta los aspectos de la sentencia controvertidos en el recurso de apelación, la problemática que ha de resolver la Sala, consiste en determinar **i)** si la afiliada fallecida ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE acreditó en vida los requisitos legales para causar el derecho a una pensión de invalidez de origen común a cargo de COLPENSIONES, y en caso afirmativo, **ii)** determinar la fecha de disfrute pensional, el valor del retroactivo causado hasta la fecha de su fallecimiento, y **iii)** la procedencia o no de la indexación de las condenas, y las costas procesales.



### **Pensión por invalidez.**

El artículo 38 de la ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

El estado de invalidez es una condición física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades físicas y/o psíquicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo una vida digna, en resumen es la pérdida de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en una actividad u oficio habitual, según lo establecido en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, que se encuentre vigente al momento de la estructuración.

Y según la jurisprudencia constitucional<sup>1</sup>, la pensión de invalidez tiene por FINALIDAD la de proteger el derecho a la seguridad social y al mínimo vital y, en consecuencia, a la vida digna de las personas en condición de discapacidad, toda vez que esta mesada pensional se convierte en su única fuente de ingresos, los cuales le permitirán suplir sus necesidades básicas, al momento en el que su condición física, mental, intelectual o sensorial le impidan valerse por sí mismo.

Lo anterior, por cuanto, la pensión de invalidez es un componente esencial del derecho fundamental a la seguridad social, el cual no solo goza de una garantía constitucional, sino que de igual manera está protegido de forma contundente en el ámbito internacional, como un resultado de la idea de progreso universal de las sociedades, y del desarrollo supranacional de valores jurídicos de gran trascendencia como el de igualdad, dignidad humana y solidaridad, todos presentes en la Constitución.

---

<sup>1</sup> Sentencias T-323 de 2018, y T-040 de 2019.

Para el Consejo de Estado – Sección Primera<sup>2</sup>, la PENSIÓN DE INVALIDEZ tiene como propósito el de resguardar a la persona que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, en tanto que tal limitación, sea física o mental, impacta negativamente en su calidad de vida, protegiendo de paso el mínimo vital de la persona y su núcleo familiar, veamos:

*“...El derecho a la seguridad social se encuentra previsto en el artículo 48 de la Carta Política que lo concibe como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se le ha reconocido carácter de fundamental en tanto la satisfacción de su contenido envuelve así mismo el goce de las demás libertades, la materialización del principio de la dignidad humana y la primacía de los derechos fundamentales. Empero, para su amparo resulta menester que se satisfagan los requisitos legales y reglamentarios previamente dispuestos para su realización, ello sin desconocer su carácter de derecho irrenunciable. **En cuanto al tópico pensional resulta pertinente recordar que las pensiones de vejez o invalidez se instituyen con el propósito de resguardar a la persona que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, en tanto que tal limitación, sea física o mental, impacta negativamente en su calidad de vida. Así mismo, buscan proteger el mínimo vital de la persona y su núcleo familiar, en el evento en que éste dependa de los ingresos económicos del afiliado...**”*

#### **De la calificación de la pérdida de capacidad laboral.**

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al Sistema General de Pensiones debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, el Instituto de Seguros Sociales, la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; y las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez, calificaciones que pueden ser objeto de discusión ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, apelable ante la Junta de Calificación Nacional.

---

<sup>2</sup> Sentencia con radicación número: 23001-23-33-000-2016-00054-01(AC), consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES.

En síntesis, conforme el art 142 del Decreto 019 de 2012 adicionado por el art 18 de la Ley 1562 de 2012, el dictamen de calificación de la PCL debe ser realizado en primera oportunidad, por la AFP, ARL ó EPS a la que se encuentre afiliado el interesado y, de existir alguna controversia con la calificación, puede interponer los respectivos recursos en los plazos señalados en la norma transcrita ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez.

Esta norma, a su vez, debe leerse concordada con los arts. 44 y 45 del Decreto 1352/13 por cuanto son las disposiciones que regulan cómo proceder cuando surtidas o agotadas las instancias de calificación previstas en la ley persisten controversias con los dictámenes emitidos por las referidas juntas de calificación de invalidez, el art 44 del Decreto 1352/13, a la letra reza:

***“Artículo 44. Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. (...)”***

Significa lo anterior, que aquellas valoraciones que se emitan durante el trámite administrativo, son controvertibles ante la Jurisdicción del Trabajo y la Seguridad social, por lo que los dictámenes que profieren las entidades del sistema de seguridad social no son medios probatorios solemnes, y por ende el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y la SS, en la medida en que la pérdida de la capacidad laboral y su origen pueden ser demostradas a través de los demás medios de prueba, que no exclusivamente con dicha probanza, así lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede apreciarse en las sentencia con radicación 26591 de 4 de abril de 2006, SL500-2013 SL9184-2016, SL3992-2019,SL4571-2019, y más recientemente la sentencia SL727-2021 del 22 de febrero de 2021, con radicación 77.899, en esta última se indicó lo siguiente:

*“Lo anterior significó, dentro de la evolución de la jurisprudencia, que a pesar de la importancia y tecnicidad de la evaluación que realizan las autoridades médico laborales y las juntas de calificación de invalidez, tanto regionales como nacionales, estas pueden ser objeto de discusión en el proceso de seguridad social, al existir otros medios probatorios que ofrezcan un mayor grado de persuasión al juzgador, en punto del grado o porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de la invalidez y su origen, lo cual debe estar enmarcado en las reglas de apreciación probatoria del artículo 61 del CPTSS.”*

## **CASO CONCRETO**

En el sub examine, debe recordarse que la pérdida de capacidad laboral de la demandante ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE ha sido calificada en seis (6) oportunidades así:

### **PRIMERA CALIFICACIÓN (fls. 21 al 23 del expediente digital archivo PDF Nº 01)**

Estuvo a cargo de la Junta Médica del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de fecha 16 de agosto de 2012, en esta primigenia oportunidad, le fue dictaminada a la actora, una PCL del **44.43%**, calificando su origen como una enfermedad común, estructurada el día 31 de enero de 2012 (fecha de evaluación por medicina interna), para su calificación se tuvo en cuenta el Manual Único de Calificación de Invalidez - Decreto 917 de 1999, y como diagnóstico o motivo de calificación, se consignó las de: “*CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA*”, y “*OSTEOARTROSIS*”

### **SEGUNDA CALIFICACIÓN (fls. 25 al 33 del expediente digital archivo PDF Nº 01)**

Estuvo a cargo de la Junta Médica de COLPENSIONES, de fecha 8 de julio de 2014, con fundamento en el Manual Único de Calificación de Invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999, concluyendo la administradora de pensiones, que la actora presenta una PCL del 31.53%, estructurada el **8 de mayo de 2014**, derivada de una enfermedad de origen común.

**TERCERA y CUARTA CALIFICACIÓN (fls. 35 al 44 y 57 al 65 del expediente digital archivo PDF N° 01):**

Estuvo a cargo de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, quien calificó a la actora en dos oportunidades, el 12 de Noviembre de 2014, y el 13 de Mayo de 2015, ambas con fundamento en el Manual Único de Calificación de Invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999, concluyendo la referida Junta Regional, que la actora presenta una PCL del 45.41% (último dictamen), estructurada el **8 de mayo de 2014** (fecha asignada por la aseguradora en la comisión laboral, donde se evidenciaron secuelas funcionales), derivada de una enfermedad de origen común, con diagnostico o motivo de calificación de: *“INSUFICIENCIA CARDIACA – NO ESPECIFICADA”*, y *“ARTROSIS NO ESPECIFICADA”*

El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, salió de sumar los siguientes conceptos: DEFICIENCIAS 25,52%, DISCAPACIDAD 4,90%, y MINUSVALÍA 15,0%.

**QUINTA CALIFICACIÓN (fls. 69 al 75 del expediente digital archivo PDF N° 01)**

Estuvo a cargo de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ quien, mediante dictamen del 25 de noviembre de 2015, confirmó lo resuelto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, esto es, que la actora presenta una PCL del 45.41% estructurada el **8 de mayo de 2014**, derivada de una enfermedad de origen común, con diagnostico o motivo de calificación de: *“INSUFICIENCIA CARDIACA NO ESPECIFICADA”*, *“ARTROSIS NO ESPECIFICADA”* e *“HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO”*.

**SEXTA CALIFICACIÓN (fls. 77 al 87 del expediente digital archivo PDF N° 01)**

Corresponde a un dictamen particular de fecha 20 de junio de 2017 realizado por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con fundamento en el Manual Único de

Calificación de Invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999, quien concluyó que la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE presenta una pérdida de capacidad laboral del **51,17%** estructurada el 8 de mayo de 2014 (fecha en la cual medicina laboral solicita inicio de calificación de pérdida de capacidad laboral por la suma de las deficiencias originadas en las múltiples patologías crónicas de la paciente), derivada de una enfermedad de origen común, cuyo diagnóstico o motivo de calificación, correspondió a las patologías de: *“GONARTROSIS DE RODILLAS; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; HIPOTIROIDISMO; INCONTINENCIA URINARIA; APNEA DE SUEÑO; HEMORROIDES INTERNAS Y EXTERNAS; DIVERTICULOSIS; ARTROSIS DEGENERATIVA (CERVICAL – LUMBAR); DIABETES MELLITUS; INSUFICIENCIA CARDIACA; EPOC; ESOFAGITIS; y GASTRITIS”*.

El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, salió de sumar los siguientes conceptos: DEFICIENCIAS 32,70%, DISCAPACIDAD 4,90%, y MINUSVALÍA 14,50%.

También debe recordarse que, en la contestación a la demanda el apoderado judicial de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, solicitó la ratificación en audiencia pública del dictamen pericial elaborado por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, sin embargo, a la audiencia de trámite prevista para efectuar la contradicción del dictamen en los términos del art. 228 del Código General del Proceso, solo se hizo presente la Dra. Gloria Isabel López Jaramillo, médica especialista en salud ocupacional, responsable de la calificación de fecha 20 de junio de 2017, no así el apoderado judicial que solicitó la contradicción al dictamen.

En cuanto a la validez del dictamen pericial realizado por el FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, estima la Sala, que el mismo reúne todos y cada uno de los requisitos formales para su procedencia en los términos del art. 226 del Código General del Proceso, pues esta prueba además de haber sido realizada por una institución o profesional especializado, se mostró clara, precisa, exhaustiva y detallada, y

también se dio la oportunidad a la contraparte de controvertir el dictamen y pedir las explicaciones del caso al perito en la referida audiencia.

Y por ello, la juez de primer grado cumplió con su deber, el de valorar el dictamen particular aportado con la demanda de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito, y las demás pruebas que obren en el proceso, tal y como lo ordena el art. 232 del CGP.

En efecto, analizado este dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de la Sala, se aprecia que las patologías, y los porcentajes de deficiencia, discapacidad, y minusvalía otorgados a la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE resultan ajustados a sus reales condiciones de salud para el mes de mayo de 2014 cuando se estructuró su estado de invalidez, y es que la diferencia sustancial entre este último dictamen particular y aquel proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez durante el trámite administrativo, consistió básicamente en el ítem de las DEFICIENCIAS, pues para la Junta Nacional la actora solo tiene en su haber una deficiencia del **25,51%**, porcentaje resultante luego de aplicar una SUMATORIA COMBINADA con la fórmula A+B\*(50-A) /100), y teniendo en cuenta las siguientes patologías, veamos:

III. Descripción de Deficiencias	% Asignado	Capítulo, Numeral, Tabla
-Artrosis de rodilla bilateral	17,40	Capítulo 3, tabla 3.3.
-Síndrome metabólico, HTA-DMIR-Hipotiroidismo	14,68	Capítulo 7 y 9, tabla 7.2 9.3 y 9.7.
-Cardiopatía isquémica controlada	7,40	capítulo 7, tabla 7.2.
-AMA de columna restringido y dolor lumbar	4,90	Capítulo 1, tabla 1.7 y 1.18.
Total Deficiencia:		25,51

Por su parte la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, le dictaminó a la actora una deficiencia general del **32.07%**, así:

I. DESCRIPCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS			
# Orden	Descripción	% Asignado	Capítulo, Numeral, Literal, Tabla
1	Deficiencia por restricción de movimiento de rodilla izquierda	14.0%	Capítulo 1, Numeral 1.4.2, Literal 1.4.2.1, Tabla 1.57-1.83
2	Deficiencia por restricción de movimiento de rodilla derecha	13.5%	Capítulo 1, Numeral 1.4.2, Literal 1.4.2.1, Tabla 1.57-1.83
3	Deficiencia global del colon	10.0%	Capítulo 5, Numeral 5.3, Tabla 5.7
4	Deficiencia por Diabetes Mellitus	9.9%	Capítulo 9, Numeral 9.8, Literal 9.8.1, Tabla 9.7, Clase II
5	Deficiencia por Hipertensión	7.4%	Capítulo 7, Numeral 7.3, Tabla 7.2, Clase I
6	Deficiencia global por restricción de movimiento de columna	5.86%	Capítulo 1, Numeral 1.2, Literal 1.2.1, Tabla
7	Deficiencia por patologías del sistema respiratorio	5.0%	Capítulo 4, Numeral 4.3, Tabla 4.3, Clase II
8	Deficiencia global por esofagitis	5.0%	Capítulo 5, Numeral 5.2, Literal 5.2.2, Tabla 5.2, Clase II
9	Deficiencia global del estómago	5.0%	Capítulo 5, Numeral 5.2, Literal 5.2.3, Tabla 5.3, Clase II
10	Deficiencia global por patología de vejiga	4.9%	Capítulo 6, Numeral 6.3, Tabla 6.3, Clase I
11	Deficiencia por hipotiroidismo	4.9%	Capítulo 9, Numeral 9.3, Literal 9.3.2, Tabla 9.3, Clase I
12	Deficiencia por afecciones reumáticas degenerativas	2.5%	Capítulo 3, Numeral 3.2, Literal 3.2.3, Tabla 3.3, Clase I
Sumatoria Combinada	$A+B*(50-A)/100$	32.07%	Calificación máxima posible 50%

Advirtiendo la Sala que los demás ítems o aspectos relevantes de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, no presentaron diferencias sustanciales, pues en ambos dictámenes se estableció enfermedad común, y la misma FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ (8 de mayo de 2014), también se consignó un similar porcentaje de DISCAPACIDAD (4.90%), y el porcentaje de MINUSVALÍA paso del 15% (junta regional y nacional) al 14.5% (dictamen particular), es decir, una diferencia mínima del 0.5% en disfavor de la demandante.

Por lo que puede concluirse que fue ese aumento de 6.56% en el ítem de las DEFICIENCIAS, el que le permitió a la demandante superar el umbral del 50% de PCL, para ser considerada una persona invalida, encontrando la Sala en que la diferencia entre uno y otro dictamen radica básicamente en la agrupación de patologías, pues la Juntas Regional y Nacional unieron varias patologías asignándoles en conjunto un porcentaje de deficiencia, mientras que la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA discriminó cada una de las patologías de la demandante, asignándoles individualmente un porcentaje de deficiencia, teniendo en cuenta los valores contenidos en las tablas del Manual Único de Calificación de Invalidez aplicable al presente asunto - Decreto 917 de 1999, lo que indudablemente repercutió en la fórmula de la sumatoria combinada.

Nótese como las Juntas Regional y Nacional aluden a una artrosis de rodilla bilateral (17,40%), mientras que la FACULTAD NACIONAL DE SALUD



PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, alude a deficiencias por restricción de movimiento tanto en rodilla izquierda (14%) como en rodilla derecha (13.5%).

Las Juntas también calificaron en conjunto las patologías de HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA), DIABETES MELLITUS (DM) e HIPOTIROIDISMO asignándole un 14.68%, mientras que la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, calificó individualmente cada una de estas deficiencias, DIABETES MELLITUS (9.9%), HIPERTENSIÓN (7.4%), e HIPOTIROIDISMO (4.9%).

Considera esta Sala, que en vista que lo plasmado en la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, está debidamente soportado en la HISTORIA CLÍNICA de la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE (fls. 91 al 257 del archivo PDF N° 01), especialmente la consulta por medicina externa realizada en la IPS ESE HOSPITAL IVÁN RESTREPO GÓMEZ el 3 mayo de 2014 (fls. 187 archivo PDF 01), días antes de estructurarse su estado de invalidez, en esta oportunidad el galeno que la atendió, hizo un recuento de todas aquellas patologías y padecimientos que la aquejaban, veamos:

M. INTERNA  
PACIENTE CON ANTECEDENTE DE HTA ; ICC; DISLIPIDEMIA ; HIPOTIROIDISMO ; DM TIPO 2 NO INSULINOREQUIRIENTE ; EPOC NO  
OXIGENOREQUIRIENTE, INCONTINENCIA URINARIA ; ACUDE PARA REVISIÓN DE PARACLÍNICOS DE RCV.  
EN LA ÚLTIMA CONSULTA SE CONSIDERÓ DESCOMPENSACIÓN DE FCC SECUNDARIA A ITU. SE INICIÓ TRATAMIENTO. TIENE P/ NUTRICIÓN Y  
ECOCARDIOGRAMA TRASNOFAGÍCO.  
DESDE HACE 4 DÍAS CON CEFALEA, MALESTAR GENERAL, NO RINORREA, NI ESTORNUDOS, CON TOS SECA CON MOVILIZACIÓN DE  
SECRECIONES. AUMENTO DE LA DISNEA. CON DOLOR PLEURÍTICO. NO SIBILANCIAS AUDIBLES. NO CIANOSIS. PERO SI EMESIS POR TOS. ...  
NO HA TOMADO MEDICAMENTOS.  
ESTUVO CON ORTOPEDIA QUIEN DX: ESPONDILOARTROSIS LUMBAR SEVERA. DESCART'P OSTEOPOROSIS CON DMO NORMAL. INICIÓ  
CARBAMAZEPINA 200 MG/D.  
AL EF TA 140/80 MMHG FC 60 FR 22 P: 89.5 KG T: 1.52 M IMC. 38.9 OBESIDAD GIL  
ALERTA, ORIENTADA, SIN DEFICIT APARENTE. PINR. MEMBRANAS TIMPÁNICAS PERLADAS. CUELLO SIN ADENOPATIAS, CON SOPLO  
IRRADIADO. NO I.Y. RSCRS CON SOPLO GILVI EN TODOS LOS FOCOS. HIPOVENTILADA, SIN CREPITOS NI OTROS SOBREGREGADOS.  
ABDOMEN BLANDO, NO MASAS, NO MEGALIAS, NO REFLEJO HEPATYUGULAR. EXTREMIDADES SIN EDEMAS.  
CONSIDERO EXACERBACIÓN DE EPOC, ANTHONISEN II. DECIDO INICIAR TRATAMIENTO.  
LUEGO INICIAR MANEJO CRÓNICO PARA DOLOR LUMBAR Y EN MIS.  
HA PRESENTADO EPISODIOS DE CONTRACCIONES MUSCULARES INVOLUNTARIAS. TIENE P/CITA CON M.I. SE PODRÍA ESTUDIAR  
TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO.  
ADEMÁS CON 3 EXACERBACIONES DE EPOC EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES.

Diagnósticos que efectivamente coinciden con las patologías tenidas en cuenta por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, a las cuales se les asignó el porcentaje de

deficiencia correspondiente, atendiendo los parámetros, y porcentajes dispuestos en el Manual Único de Calificación – Decreto 917 de 1999.

8. DIAGNOSTICO MOTIVO DE CALIFICACIÓN	
1. Gonartrosis de rodillas	2. Artrosis degenerativa (Cervical - Lumbar)
3. Hipertensión Arterial	4. Diabetes Mellitus
5. Hipotiroidismo	6. Insuficiencia Cardíaca
7. Incontinencia Urinaria	8. Epoc
9. Apnea del Sueño	10. Esofagitis
11. Hemorroides internas y externas	12. Gastritis
13. Diverticulosis	.....

Por ello, debe concluirse necesariamente que la señora ANA LUISA DURANGO DE AGUIRRE, presenta una pérdida de capacidad laboral del **51.17%**, derivada de una enfermedad de origen común, pues a cada patología debía asignársele un porcentaje de deficiencia individualizado, como se consignó en el dictamen de la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, toda vez que el manual único de calificación de invalidez (Decreto 917 de 1990), consagra una tabla de calificación diferente, dependiendo del sistema orgánico al que estén asociadas las deficiencias y/o patologías, pues solo se esta manera se puede garantizar una correcta aplicación de la fórmula matemática de la sumatoria combinada, tal y como lo señala el numeral 3° del art. 9° del Decreto 917 de 1999, que alude a las instrucciones generales para los calificadores, veamos.

**“ARTICULO 9o. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS CALIFICADORES.** El "Manual único para la calificación de la invalidez" establece con base en los criterios y componentes definidos en los artículos anteriores, un método uniforme, de uso obligatorio para la determinación legal de la pérdida de la capacidad laboral que presenta un individuo al momento de su evaluación.

(...)

*Sin embargo, en aquellos casos en que se encuentren afectados dos o más órganos o sistemas, los valores parciales de las respectivas deficiencias globales deben ser combinados según la siguiente fórmula: **A+(50-A)B/100** Donde A y B corresponden a las diferentes deficiencias. Siendo A la de mayor valor y B la de menor valor.*

*De esta forma se combinan los valores correspondientes A y B. Este procedimiento se denomina suma combinada. En caso de que existan más de dos valores, éstos deben ser previamente ordenados de mayor a menor valor, para proceder a combinarlos sucesivamente aplicando la fórmula.*

Semanas cotizadas

En cuanto al requisito de semanas cotizadas, observa la Sala que en la HISTORIA LABORAL de la demandante obrante en el expediente administrativo aportado por COLPENSIONES (archivo N° 02), consta la existencia de 568,86 semanas cotizadas en toda la vida laboral, de las cuales 154,29 semanas, se encuentran cotizadas entre el 8 de mayo de 2011 y el 8 de mayo de 2014, esto es, en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, resultando evidente la causación del derecho pensional en los términos de la Ley 860 de 2003.

22172953	DURANGO DE AGUIRRE A	01/02/2011	31/01/2012	\$535.600	51,43	0,00	0,00	51,43
22172953	DURANGO DE AGUIRRE A	01/02/2012	31/01/2013	\$566.700	51,43	0,00	0,00	51,43
22172953	DURANGO DE AGUIRRE A	01/02/2013	31/01/2014	\$589.500	51,43	0,00	0,00	51,43
22172953	DURANGO DE AGUIRRE A	01/02/2014	31/03/2014	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
900140632	ASUINFANCIA	01/02/2014	31/12/2014	\$616.000	47,14	0,00	0,00	47,14
900140632	ASUINFANCIA	01/01/2015	31/01/2015	\$644.350	4,29	0,00	0,00	4,29
800044785	ORGANIZACIÓN INDÍGEN	01/02/2015	28/02/2015	\$172.000	1,14	0,00	0,00	1,14
800044785	ORGANIZACIÓN INDÍGEN	01/03/2015	31/12/2015	\$644.350	42,86	0,00	0,00	42,86
890980942	COMITE PRIVADO DE AS	01/02/2016	29/02/2016	\$643.000	4,00	0,00	0,00	4,00
890980942	COMITE PRIVADO DE AS	01/03/2016	31/10/2016	\$689.455	34,29	0,00	0,00	34,29
812005406	CORPORACIÓN AMIGOS D	01/11/2016	31/12/2016	\$689.000	8,57	0,00	0,00	8,57
812005406	CORPORACIÓN AMIGOS D	01/01/2017	28/02/2017	\$738.000	8,57	0,00	0,00	8,57
812005406	CORPORACIÓN AMIGOS D	01/03/2017	30/11/2017	\$737.717	38,57	0,00	0,00	38,57
[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:								568,86

En este sentido se confirmará lo decidido en primera instancia.

Prescripción, disfrute pensional y retroactivo.

Conocido este punto de la sentencia bajo el grado de consulta a favor de Colpensiones, se advierte por parte de la Sala, que el presente asunto no operó la prescripción parcial de mesadas pensionales en los términos reglados por los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, toda vez que la exigibilidad del derecho se causó el día 22 de mayo de 2017 con el dictamen emitido por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y dado que la demanda ordinaria laboral que hoy nos ocupa, data del 07 de septiembre del mismo año 2017 (fl. 11 archivo PDF 01), puede concluirse que la reclamación pensional fue oportuna, lo que impidió la prescripción parcial de mesadas pensionales.

En cuanto al disfrute pensional, debe decirse que al no estar probado que la demandante haya recibido el pago de incapacidades médicas desde la

fecha de estructuración de su estado de invalidez y hasta la fecha en que se profiere esta sentencia, la pensión debía pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca el estado de invalidez, tal y como lo dispone el art. 40 de la Ley 100 de 1993, pues no resultan ciertos los argumentos de la apoderada judicial de Colpensiones, en tanto que la sentencia es constitutiva de la fecha de estructuración del estado de invalidez, cuando en realidad es declarativa de este aspecto, pues concluir lo contrario sería contrariar el precepto legal referido.

En atención al grado jurisdiccional de consulta que opera a favor de COLPENSIONES, la Sala también procedió a recalcular el monto del retroactivo pensional adeudado de los sucesores procesales de la demandante, por el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2014 y el 21 de diciembre de 2020 (fecha de su fallecimiento), teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente, y 13 mesadas anuales, lo que arrojó como resultado la suma de \$64.395.968, esto es, una cifra ligeramente superior a la dispuesta por la juez de primer grado (\$64.136.439), no obstante como la consulta solo opera en lo desfavorable para Colpensiones, se dejara incólume la liquidación de la a quo.

AÑO	MESADA	# DE MESADAS	SUBTOTAL
2014	\$ 616.000	8,76	\$ 5.396.160
2015	\$ 644.350	13	\$ 8.376.550
2016	\$ 689.455	13	\$ 8.962.915
2017	\$ 737.717	13	\$ 9.590.321
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	12,7	\$ 11.148.098

\$ 64.395.698

También se confirmará la autorización dada a COLPENSIONES, en cuanto a deducir del retroactivo de la pensión de invalidez, el porcentaje de la mesada pensional destinado al subsistema general de salud, lo anterior, al ser esta una obligación de carácter legal que le atañe a todo pensionado, conforme a lo dispuesto en el art. 143 de la Ley 100 de 1993.

**Indexación de las condenas y costas procesales**

Respecto a la indexación de las condenas considera la Sala, que lo ordenado por la funcionaria judicial de primer grado se debe confirmar, pues

solo a través de este mecanismo de actualización monetaria se puede recomponer el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales que no se pagaron oportunamente, máxime que no prosperaron en el sub lite los intereses moratorios a los que alude el art. 141 de la Ley 100 de 1993, además al ser los indicadores económicos hecho notorio, no se requería demostración alguna para imponer la codena a la indexación.

No obstante, la Sala sí accederá a revocar la condena en costas procesales a cargo de COLPENSIONES, pues fue solo a través de este proceso judicial que se le dio plena validez al dictamen particular de pérdida de capacidad laboral elaborado por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, pues hasta antes de proferirse la sentencia de primera instancia, la administradora pública de pensiones no estaba obligada al reconocimiento pensional, pues también existía otra calificación de pérdida de capacidad laboral en firme emitida por una entidad competente para ello en los términos del art. 41 de la Ley 100 de 1993, según la cual la demandante no lograba alcanzar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral mínimo, para ser considerada una persona invalida, y aunque sea cierto que la condena en costas procesales obedezca a un criterio netamente objetivo, según el cual las costas procesales quedan a cargo de la parte vencida en el juicio, en el presente asunto no es del todo cierto que la entidad accionada hubiese salido derrotada, pues los argumentos utilizados para negar el reconocimiento pensional se encontraban ajustados al ordenamiento jurídico en lo atinente al sistema de seguridad social en pensiones (art. 1° de la Ley 860 de 2003).

En esta instancia tampoco habrá lugar a imponer costas procesales, pues el conocimiento que se tuvo del proceso fue únicamente en apelación y consulta a favor de COLPENSIONES.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, en cuanto condenó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al reconocimiento y pago de costas procesales en la primera instancia, para en su lugar absolver de esta condena, en atención consideraciones vertidas en esta sentencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

**TERCERO:** Sin costas en esta instancia.

**CUARTO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**QUINTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada